S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 94

O R D I N A R I A

LUNES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con treinta minutos del lunes diez de septiembre de dos mil doce, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Juan N. Silva Meza, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

A continuación, el señor Ministro Presidente Silva Meza abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Proyecto de acta de la sesión pública número noventa y tres, ordinaria, celebrada el jueves seis de septiembre de dos mil doce.

Por unanimidad de once votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Sesión Pública Núm. 94 Lunes 10 de septiembre de 2012

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el diez de septiembre de dos mil doce:

II. 1. 252/2012 Amparo en revisión 252/2012 promovido por ***** contra el acto del Juzgado Tercero de lo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, consistente en el auto de formal prisión de 17 de mayo de 2011, dictado en la causa penal 88/2011. En el proyecto formulado por la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas se propuso: *“PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***** , en contra de los actos y autoridad señalados en el resultando primero, en términos y para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria”*.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas expuso los antecedentes del asunto, así como una síntesis de las consideraciones de su proyecto.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Pleno los considerandos del primero al tercero, relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad y a los antecedentes del caso.

El señor Ministro Aguirre Anguiano consideró que debe analizarse con detenimiento el considerando tercero, en tanto que trasciende a los considerandos cuarto y quinto.

Sesión Pública Núm. 94 Lunes 10 de septiembre de 2012

El señor Ministro Presidente Silva Meza aclaró que el considerando tercero sólo contiene la relatoría de los antecedentes.

Por unanimidad de once votos, se aprobaron los considerandos del primero al tercero del proyecto.

En relación con el considerando cuarto, en cuanto propone determinar que aun cuando con posterioridad al dictado del auto de formal prisión reclamado en el juicio de amparo el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito determinó que era el Juez Segundo Militar adscrito a la Primera Región Militar el que debía conocer del asunto, y que, en consecuencia, éste emitió un acuerdo que denominó “auto de reanudación del procedimiento después de haberse dirimido el conflicto competencial”, en esta jurisdicción de amparo es posible analizar a plenitud la validez de dicho auto de formal prisión, ya que la libertad personal del quejoso continúa siendo afectada esencialmente por él, el señor Ministro Aguirre Anguiano se manifestó en contra, indicando que el problema competencial ya fue resuelto mediante resolución firme y que, por tanto, este Alto Tribunal carece de competencia para emitir un pronunciamiento sobre lo mismo, al ser cosa juzgada.

La señora Ministra Luna Ramos, después de realizar algunas precisiones sobre los antecedentes del caso, sugirió a la señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas que en el proyecto se diera cuenta con la aclaración

Sesión Pública Núm. 94 Lunes 10 de septiembre de 2012

que efectuó el Juez de Distrito respecto de los actos reclamados en el considerando segundo de su sentencia, en cuanto admite la demanda exclusivamente respecto del auto de formal prisión emitido por el juez común y la desechó por lo que atañe al auto de reanudación del procedimiento, dictado por el juez militar. En relación con la precisión que ese juzgador federal realiza en el sentido de tener como autoridad emisora al Juez Tercero de lo Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León y, como autoridad substituta, al Juez Segundo Militar adscrito a la Primera Región Militar, señaló que ello debe modificarse al tenor de la tesis P./J. 133/99, de rubro: “SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO”, para efecto de determinar que es a dicho juez militar al que se le requerirá el cumplimiento del fallo protector.

Finalmente, señaló que reservaría su opinión sobre la posibilidad de analizar el tema de la competencia al momento en que se dé cuenta con el siguiente considerando.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas manifestó estar de acuerdo con las observaciones formuladas por la señora Ministra Luna Ramos.

El señor Ministro Valls Hernández señaló estar en contra de la propuesta porque aun cuando en el amparo sólo se hubiese tenido como reclamado el auto de formal prisión

Sesión Pública Núm. 94 Lunes 10 de septiembre de 2012

que dictó el Juez Tercero de lo Penal del Primer Distrito Judicial de Nuevo León, no puede dejarse de analizar la constitucionalidad del auto de reanudación del procedimiento después de haberse dirimido el conflicto competencial, dictado por el Juez Segundo Militar adscrito a la Primera Región Militar.

Agregó que la definición de la jurisdicción competente militar u ordinaria, federal o local, es la que debe ser materia de los asuntos relacionados con el tema de restricción de la jurisdicción militar, por lo que debe examinarse tal aspecto de manera oficiosa en términos de la sentencia dictada en el expediente varios 912/2010, sin necesidad de que se plantee y/o controvierta por alguna de las partes, toda vez que la razón y, a la vez, la finalidad por la que este Alto Tribunal haya ordenado que se hicieran de su conocimiento este tipo de asuntos es precisamente el análisis de este punto. De esta forma, indicó que debe tenerse en cuenta que la definición del referido aspecto competencial en este asunto comprende e impacta necesariamente al auto de reanudación del procedimiento, de ahí que no pueda desvincularse del estudio que al efecto se realice.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas, en relación con lo expresado por el señor Ministro Valls Hernández, indicó que en el proyecto únicamente se propone encausar el procedimiento exclusivamente a la materia de la competencia, de ahí que se estime procedente ordenar que se remitan los autos al juez competente para

Sesión Pública Núm. 94 Lunes 10 de septiembre de 2012

que éste deje insubsistente el auto de formal prisión y todo lo actuado ante el juez incompetente, y proceda a resolver la situación jurídica del inculpado, señalando que si bien el quejoso impugnó el auto de formal prisión por vicios propios, lo cierto es que al quedar insubsistente dicha actuación no es dable estudiar los conceptos de violación relativos.

La señora Ministra Luna Ramos precisó que el auto de formal prisión afecta la libertad del quejoso en la medida en que el juez militar lo validó y reanudó el procedimiento correspondiente, pero que, al ser dicho auto anterior a las actuaciones que llevó a cabo el juez militar, al quedar insubsistente aquél, todo lo demás quedaría también en la misma condición.

El señor Ministro Aguilar Morales señaló que el juez militar valida el auto de formal prisión dictado por el juez del fuero común en cumplimiento de la resolución del Tribunal Colegiado en la que se dirimió el conflicto competencial y se le instruyó para que continuara con el procedimiento.

Después de señalar que la resolución del Tribunal Colegiado no fue ajena a un estudio de competencia constitucional, en tanto que interpreta al artículo 13 de la Constitución Federal, indicó que si bien pudiera estimarse que el auto con el que el juez militar reanuda el procedimiento no se admitió como acto reclamado, ya que derivó del cumplimiento de la resolución del referido Tribunal Colegiado, lo que sí resulta cierto es que dicho juez militar

Sesión Pública Núm. 94 Lunes 10 de septiembre de 2012

debe considerársele como autoridad responsable, en tanto que validó o asumió como propio el auto de formal prisión.

Por otra parte, señaló que el proyecto carece de una explicación más amplia de los antecedentes que tome en consideración la resolución del Tribunal Colegiado, en la medida en que tuvo como consecuencia jurídica la de obligar al juez militar a asumir la competencia que ahora se cuestiona desde un punto de vista constitucional, agregando que también hace falta ilación entre las premisas del proyecto, en orden de sostener debidamente que el juez federal es el que debe conocer de la causa penal respectiva.

Sometida a votación la propuesta modificada del considerando cuarto, se aprobó por unanimidad de once votos, con las salvedades de los señores Ministros Aguilar Morales, Valls Hernández y Ortiz Mayagoitia.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió al Pleno el considerando quinto, en cuanto propone analizar, en suplencia de queja, cuál es la jurisdicción competente para conocer de la causa penal de que se trata y, por ende, para afectar la libertad personal del quejoso, en la inteligencia de que no es obstáculo para ello la resolución del Tribunal Colegiado en la que dirimió el conflicto competencial suscitado entre el juez penal del fuero común y el juez militar.

La señora Ministra Luna Ramos manifestó estar en contra del proyecto, tomando en cuenta que en este asunto subsiste un problema de cosa juzgada aún más severo que

Sesión Pública Núm. 94 Lunes 10 de septiembre de 2012

en el amparo en revisión 217/2012, ya que conforme al artículo 21, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la competencia originaria para conocer de los conflictos competenciales corresponde a las Salas de este Alto Tribunal, la cual se delegó a los Tribunales Colegiados en el punto quinto del Acuerdo General Plenario 5/2001, de lo que se sigue que, en el caso, el Tribunal Colegiado resolvió el conflicto competencial relativo actuando en ejercicio de competencias de la Suprema Corte de Justicia, por lo que la resolución que emitió no es impugnabile.

Indicó que, contrario a lo que señala el proyecto, el Tribunal Colegiado resolvió en torno a una competencia constitucional, en tanto que a partir de un análisis del artículo 13 de la Norma Fundamental llega a la conclusión de que los delitos por lo que se sigue la causa penal corresponden al fuero militar y, con base en el artículo 57 del Código de Justicia Militar, concluye que el juez castrense es el que debe conocer del asunto, de forma que puede decirse que dicho Tribunal Colegiado se pronunció respecto de los mismos artículos que se analizan en esta instancia, por lo que no podría negarse que realizó una análisis constitucional.

Señaló que aun cuando el Tribunal Colegiado solamente hubiere analizado el artículo 57 del Código de Justicia Militar, habría cosa juzgada, ya que de lo contrario podría sostenerse el criterio de que toda resolución pronunciada en términos de legalidad y no de

Sesión Pública Núm. 94 Lunes 10 de septiembre de 2012

constitucionalidad es susceptible de análisis posterior por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que se acabaría con la seguridad jurídica, máxime que en el caso no puede hacerse, en suplencia de queja, un análisis constitucional que ya efectuó el Tribunal Colegiado.

Por ende, estimó que el asunto debe resolverse en el sentido de determinar que existe cosa juzgada por virtud de la sentencia de un Tribunal Colegiado que, ya sea en términos legales o constitucionales, atribuyó la competencia al juez militar de manera inimpugnable, citando la tesis 2a. LIV/2009, de rubro: “CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SI UNO DE ELLOS DESCONOCE EL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA SOBRE LA CUESTIÓN COMPETENCIAL Y DECLARA SER INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL ASUNTO RELATIVO, PROCEDE REVOCAR SU DETERMINACIÓN EN RESPETO A LA GARANTÍA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”, con base en la cual cuestionó nuevamente la posibilidad de desconocer una resolución que dictó el Tribunal Colegiado en ejercicio de la competencia que le delegó la Suprema Corte.

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia destacó que, legalmente, el Tribunal Colegiado no tiene facultad para dirimir conflictos competenciales que se suscitan entre jueces de fueros distintos, haciendo referencia al artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Indicó que, no obstante, en el caso, el Segundo

Sesión Pública Núm. 94 Lunes 10 de septiembre de 2012

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito resolvió el conflicto competencial entre el juez penal del fuero común y el juez militar, en jurisdicción delegada por este Alto Tribunal a través del Acuerdo General Plenario 5/2001, por lo que debe estimarse que la decisión de dicho órgano jurisdiccional se dictó como si la hubiera emitido directamente la Suprema Corte de Justicia.

Recordó que en la Primera Sala se tocó una cuestión similar y se adujo que la resolución del Tribunal Colegiado en materia de constitucionalidad de leyes locales, emitida en ejercicio de facultades delegadas por este Alto Tribunal, no puede ser tocada. Señaló que, en este tipo de casos, opera a plenitud el principio establecido en el artículo 104 constitucional de que las decisiones de los Tribunales Colegiados son definitivas. Así, consideró que si de oficio se desconoce dicho principio bajo el argumento de que en el caso no existe cosa juzgada, podrían subsecuentemente desconocerse las resoluciones de cualquiera de las Salas o de los Tribunales Colegiados dictadas en ejercicio de competencia delegada, concluyendo que la competencia no puede ser materia del presente juicio de amparo, en el cual no se cuestionó la respectiva decisión del Tribunal Colegiado.

El señor Ministro Valls Hernández manifestó no compartir que la definición de la jurisdicción competente en estos asuntos se realice en vía de suplencia, al estimar que tal aspecto debe analizarse de manera oficiosa, por virtud de lo dispuesto en la sentencia dictada en el expediente varios

Sesión Pública Núm. 94 Lunes 10 de septiembre de 2012

912/2010, en relación con el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “*****”.

Además, indicó que la competencia de los tribunales militares encuentra su razón de ser en la especialidad de su materia y no en que se esté en presencia de un beneficio o de un perjuicio para los miembros de las fuerzas armadas, de ahí que la definición de la jurisdicción competente debe atender a un aspecto primordial del debido proceso y no a un supuesto beneficio para la situación jurídica del quejoso. Sin perjuicio de lo anterior, señaló compartir la precisión que se hace en el proyecto en el sentido de que la resolución del conflicto competencial que se suscitó en su momento por parte del Segundo Colegiado del Cuarto Circuito no es obstáculo para la definición de la jurisdicción competente en este asunto, aun cuando considere que esto obedece a que no pueda haber cosa juzgada debido a que el caso no ha sido resuelto en definitiva en lo principal.

El señor Ministro Cossío Díaz señaló que si bien en la Sala se resolvió un problema similar por unanimidad de cinco votos, lo cierto es que este caso presenta una condición diferente ante la vinculación de la Suprema Corte de Justicia al cumplimiento de una sentencia de carácter internacional, por lo que cobra relevancia el argumento relativo a que no es posible oponer a dicho cumplimiento elementos propios del orden jurídico mexicano.

Sesión Pública Núm. 94 Lunes 10 de septiembre de 2012

En estos términos, señaló que aun cuando se trate de una cuestión extraordinariamente complicada, tomando en cuenta que si el derecho internacional asume la posibilidad de que las sentencias de fondo puedan ser revocadas por una decisión internacional, debe estimarse, con mayor razón, que puede revocarse una resolución que se constriñe a fijar una condición competencial.

Agregó estar en contra del considerando quinto, en tanto que la suplencia de queja no se sustenta en una razón técnica, siendo que el análisis competencial debe hacerse, pues, en cumplimiento directo de una sentencia internacional, aun cuando ello implique revocar una sentencia que se dictó en ejercicio de facultades delegadas por la Suprema Corte de Justicia.

El señor Ministro Pardo Rebolledo, después de precisar los antecedentes del caso y contrastarlos con los que informan al amparo en revisión 217/2012, indicó que resulta peligroso que la posibilidad de entrar al análisis de la competencia dependa de que este tema no haya sido definido previamente, en tanto que se trata de asuntos atraídos a partir de los criterios sustentados en el expediente varios 912/2010, con la intención de reflejar hacia todos los jueces del país los argumentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ende, indicó que, tomando en cuenta que la resolución del conflicto competencial del Tribunal Colegiado es anterior a la sentencia del referido expediente varios, si se pretende dar alguna trascendencia a

Sesión Pública Núm. 94 Lunes 10 de septiembre de 2012

lo que pronunció la Suprema Corte en éste, no es dable alegar que dicho tema ya fue resuelto, pues lo que se pretende es lograr delimitar el fuero militar a partir de los casos concretos, siendo que, de lo contrario, se relativizaría la trascendencia de la problemática en la que están en juego los derechos humanos en términos del artículo 1º constitucional.

Por tanto, consideró que el tema de la competencia debe precisarse para generar seguridad jurídica, pues se concebiría una situación de incertidumbre al establecerse que en los casos en donde el tema se definió vía conflicto competencial, éste ya no pueda ser abordado por la Suprema Corte de Justicia, de forma que en casos similares dicho tema dependería exclusivamente de si se hubiese definido o no de forma previa, con lo que la aplicación de los criterios del expediente varios 912/2010 no sería general, sino que dependería de cada caso concreto, siendo esto contrario a lo que mayoritariamente se decidió en dicho asunto.

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia aclaró que en el expediente varios 912/2010 se estableció que los criterios ahí asumidos tendrían efectos hacia el futuro, siendo que el Tribunal Colegiado resolvió el conflicto competencial antes de que se dictara la sentencia en aquél.

Por otro lado, señaló que no se está en ejecución directa de una sentencia internacional, máxime que las

Sesión Pública Núm. 94 Lunes 10 de septiembre de 2012

obligaciones que se impusieron en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos consistieron en enseñar la jurisprudencia de dicha Corte a los jueces de Distrito; dar cursos de derechos humanos, y que la interpretación del artículo 57 del Código de Justicia Militar se oriente, conforme a la competencia y al estado de los asuntos de este Alto Tribunal, en el mismo sentido que dicha jurisprudencia internacional, en tanto que es vinculante. Finalmente, concluyó que resulta delicado revivir temas y entrar a su estudio a la luz de un criterio sobrevenido, para echar abajo decisiones, como ocurriría en el presente caso.

El señor Ministro Aguilar Morales señaló que, al igual que el señor Ministro Pardo Rebolledo, cuando se resolvió el expediente varios 912/2010, votó con diversas salvedades, indicando que, con independencia de que lo obligue lo que se decidió en dicho asunto, el cumplimiento de esa sentencia se efectúa en combinación con el tratado mismo.

En este sentido, señaló que tanto el Pacto de San José como la propia sentencia del caso “*****”, si bien dan origen a un compromiso de llevar a cabo una interpretación jurisdiccional específica respecto del artículo 13 constitucional frente al artículo 57, fracción II, del Código de Justicia Militar, ello debe hacerse, como lo señala la propia sentencia, en la materia de la competencia del tribunal, es decir, *ex officio*, de forma que aun cuando esté involucrada una serie de derechos importante y diversos compromisos internacionales, lo cierto es que existe una

Sesión Pública Núm. 94 Lunes 10 de septiembre de 2012

sentencia que, por virtud del sistema constitucional de amparo, da origen a criterios con cierta fuerza legal, máxime si se trata de una resolución derivada del ejercicio de la competencia delegada por este Alto Tribunal. En este sentido, señaló que sostener lo contrario conllevaría a la posibilidad de que se revisen todos los asuntos en donde esté involucrada la jurisdicción castrense, que pudieran existir en cualquiera de las instancias de la justicia mexicana, ya sea en trámite o aun resueltos, siempre que en ellos no exista un pronunciamiento constitucional sobre la competencia.

Por ende, consideró que existen ciertos límites legales que impiden a la Suprema Corte de Justicia, aun ante la obligación de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “*****”, romper el sistema constitucional del juicio de amparo, de manera que habrá resoluciones, como en este caso la del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que deban considerarse como definitivas, en tanto que no son de su competencia originaria, sino derivadas del ejercicio de una competencia delegada por la Suprema Corte de Justicia.

Finalmente, estimó que la referida resolución del Tribunal Colegiado, más que derivar de un ejercicio de competencia delegada por este Alto Tribunal, establece y determina la competencia de un determinado órgano jurisdiccional, con lo que da seguridad a las partes involucradas a partir de que tiene un carácter permanente,

Sesión Pública Núm. 94 Lunes 10 de septiembre de 2012

por lo que debe tomarse en consideración y no ignorarse como si se tratara de cualquier opinión. De esta forma, concluyó que no puede volverse a tratar el tema de la competencia sobre el cual el Tribunal Colegiado ya se pronunció en términos constitucionales al confrontar al artículo 13 de la Norma Fundamental con el artículo 57, fracción II, siendo esta resolución cosa juzgada que debe respetar, incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El señor Ministro Aguirre Anguiano externó su punto de vista respecto del papel de los Tribunales Internacionales, y explicó las tres posturas que a su juicio se manifiestan en la discusión. Al respecto, indicó que la suya es a favor de garantizar la seguridad jurídica, siendo ésta uno de los pocos valores fundamentales del orden jurídico mexicano. Estimó, finalmente, que no se ha tenido la paciencia necesaria para encontrar el caso en que de forma expedita se sienta jurisprudencia.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea manifestó disentir de la opinión del señor Ministro Aguirre Anguiano respecto del medio que señaló como el usado por los señores Ministros para justificar la ejecución de una sentencia internacional condenatoria para el Estado Mexicano, indicando que, por el contrario, se brinda una interpretación armónica a la luz del artículo 1º constitucional, que privilegia la vigencia y el desarrollo de los derechos humanos.

Sesión Pública Núm. 94 Lunes 10 de septiembre de 2012

Señaló que se está ante el cumplimiento de diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indicando que si bien la forma en la que se debe cumplir con ella puede variar, lo cierto es que dicha sentencia debe cumplirse a partir del puente significado por el expediente varios 912/2010, pues lo que está a discusión no son los criterios que ahí se establecieron, sino cómo pueden aplicarse en los casos concretos.

De esta forma, señaló que el argumento en el sentido de que revisar la resolución del Tribunal Colegiado que dirimió el conflicto competencial implica acabar con la seguridad jurídica, es efectista y carente de contenido, ya que lo que se pretende determinar con dicho proceder es cómo opera la cosa juzgada en materia competencial, cuando se trata de dar cumplimiento a una sentencia condenatoria en contra del Estado Mexicano, de modo que siendo la competencia un presupuesto procesal y toda vez que la condena se refiere al tema de la competencia, no existe posibilidad de que desde el punto de vista constitucional y de derechos humanos en términos regionales, pueda supeditarse el cumplimiento de una sentencia internacional a una condición de cosa juzgada, cuando además el Tribunal Colegiado, en su resolución, no se refirió a la constitucionalidad o convencionalidad del artículo 57, fracción II, del Código de Justicia Militar, ya que no pudo hacerlo en su momento, máxime que en el Acuerdo General Plenario 5/2001, no se delegaron a los Tribunales

Sesión Pública Núm. 94 Lunes 10 de septiembre de 2012

Colegiados funciones de control constitucional ni se reconoció a las partes interés para cuestionar la constitucionalidad o convencionalidad del precepto referido, siendo que no puede existir cosa juzgada respecto de algo que el Tribunal Colegiado no podía analizar. En estos términos, señaló que la litis que analiza este Alto Tribunal es otra, de modo que si bien el referido Tribunal Colegiado hizo una interpretación del artículo 13 constitucional, lo cierto es que este Alto Tribunal se ocupará de señalar que dicho precepto se interpreta conforme a la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Indicó que definir si debe entrarse al análisis de la competencia, ya sea de oficio por tratarse de un presupuesto procesal o mediante suplencia de la queja, constituye un problema de menor calado que el anterior, pues de cualquier manera tendrá que arribarse a la inaplicación del precepto, siendo que lo que debe permear en el caso, además de lo que resolvió el Pleno en el expediente varios 912/2010, es que se está ante el cumplimiento de sentencias internacionales condenatorias en contra del Estado Mexicano, a las cuales, por mayoría de votos, se determinó atribuir carácter obligatorio, señalando que ello no se logrará si se antepone una cuestión competencial, discutible en cuanto a su definitividad como presupuesto procesal, y siendo que el Tribunal Colegiado no pudo analizar la litis en términos de constitucionalidad o convencionalidad.

Sesión Pública Núm. 94 Lunes 10 de septiembre de 2012

El señor Ministro Aguirre Anguiano aclaró que se está tratando de sortear ciertos aspectos procesales con argumentos ligeros e inconvenientes o, incluso, evasivos. Además, señaló que la invocación de la seguridad jurídica, como uno de los pocos valores fundamentales que existen, no se trata de un efectismo, sino de un hecho.

El señor Ministro Franco González Salas indicó que el asunto debe enfocarse a la luz de lo resuelto en el expediente varios 912/2010, señalando que si bien los criterios de las Salas son válidos en cuanto criterios generales, lo cierto es que este caso presenta una situación de excepción. De esta forma, estimó que aun cuando resulte lógico que quienes mantuvieron un posicionamiento contrario a lo que ahí se resolvió sostengan un punto de vista diferente, lo cierto es que la decisión se adoptó de manera mayoritaria y, consecuentemente, vinculante, pudiendo ser, no obstante, rectificada. Por ende, señaló que, estando aun convencido de lo que se resolvió en dicho asunto, la Suprema Corte de Justicia, como Tribunal Constitucional, creó una regla de recepción de la sentencia internacional en comento, y la resolución emitida determina cómo este Alto Tribunal cumpliría con ella.

Por otra parte, señaló que los asuntos respectivos se atrajeron precisamente por un problema de jurisdicción entre el fuero militar y el fuero del orden común, lo que, en última instancia, no es más que un problema de competencia, en el que se debe determinar cuál es la que debe privar y, si opera

Sesión Pública Núm. 94 Lunes 10 de septiembre de 2012

la competencia común, establecer si corresponde al fuero local o al federal.

De esta forma, estimó que este tema debe resolverse por la Suprema Corte de Justicia, como una excepción a aquellos criterios establecidos y que siguen siendo válidos de manera general, a partir del enfoque del cumplimiento de una sentencia internacional. Finalmente, estimó que este asunto corresponde al fuero local, dadas las circunstancias que se dan, considerando que el Juez de Militar dio razones suficientemente válidas para llegar a la conclusión a que arribó.

El señor Ministro Aguilar Morales aclaró que su opinión la emitió asumiendo como obligatorios los criterios de la resolución del expediente varios 912/2010, en específico el establecido en el párrafo trescientos treinta y nueve, aun cuando hubiera votado diversos aspectos de dicha sentencia en un sentido diverso al vigente.

El señor Ministro Cossío Díaz indicó que existen dos formas de cumplir con la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “*****”: 1) de manera indirecta, que presupone que existe una posición del orden jurídico mexicano oponible a la del orden jurídico interamericano, ya sea a) por vía de negar la cosa juzgada, o b) a partir de la condición de presupuesto procesal, o vía suplencia de queja, y 2) de manera directa, la cual asume junto con el señor Ministro Franco González

Sesión Pública Núm. 94 Lunes 10 de septiembre de 2012

Salas, y postula que no es posible presentar ante el orden jurídico internacional una serie de elementos del orden jurídico nacional, para evitar el cumplimiento de la sentencia.

Cuestionó qué hubiera decidido la Suprema Corte de Justicia si la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinara que aquélla debió resolver un caso de forma distinta, indicando que esta situación es una de las implicaciones de que este país decidiera, a través de sus órganos representativos, aceptar la jurisdicción contenciosa de dicha Corte Internacional.

Señaló que se está en el caso de cumplir de forma directa la sentencia, en tanto se surte la condición de que no es posible plantear o hacer valer medios jurídicos nacionales para impedir su cumplimiento, indicando que ello sucede respecto de una gran cantidad de países que han asumido la necesidad o la conveniencia de subordinar su orden jurídico nacional al internacional y constituir un orden jurídico unitario, de manera que, en esos términos, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se convertirían en sentencias nacionales.

Estimó que si lo anterior se verifica, no es posible entrar al estudio del asunto por una vía de un cumplimiento indirecto, a través de no respetar la cosa juzgada o de suplir la deficiencia de la queja, sino a partir de un cumplimiento directo con base en el cual las formas jurídicas nacionales no pueden tener prevalencia en este tipo de decisiones,

Sesión Pública Núm. 94 Lunes 10 de septiembre de 2012

concluyendo que si bien estaría de acuerdo con el proyecto en que el asunto debe ser de la competencia de la jurisdicción penal ordinaria, no lo está con que el asunto deba ser del conocimiento de un juzgador federal, cuando se trata de delitos en contra de la administración de justicia.

El señor Ministro Presidente Silva Meza, después de precisar la propuesta del proyecto, argumentó que el Tribunal Colegiado de Circuito, aunque citó en su resolución al artículo 13 constitucional, en ejercicio de la competencia delegada no llegó a ejercer un control de constitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar y, mucho menos, de convencionalidad.

Por otro lado, señaló que sólo existe cosa juzgada respecto del tema de la competencia desde un punto de vista meramente técnico, ya que lo cierto es que el amparo fue interpuesto en contra del auto de formal prisión, que se dictó con anterioridad a la resolución del Tribunal Colegiado.

La señora Ministra Luna Ramos consideró que, en efecto, el problema que se dilucida en esta instancia ya fue decidido por el Tribunal Colegiado, por lo que no constituye una razón para abordarlo el que no se haya resuelto en definitiva el asunto en lo principal. Asimismo, estimó que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “*****”, vinculó a este Alto Tribunal a la capacitación a los operadores judiciales, mediante programas y cursos permanentes, siendo que en ninguna

Sesión Pública Núm. 94 Lunes 10 de septiembre de 2012

parte señala la manera en que se deben resolver los casos a partir de la decisión que se tomó, de manera que el hecho de que se atrajeran asuntos no implica que las causas penales respectivas se lleven a una jurisdicción que no les corresponde, pues la atracción se fundó en la idea de que se revisaría cada caso en su mérito.

Por otra parte, después de indicar que no estaría de acuerdo con que se califiquen los argumentos que no se compartan, como de efectistas y sin contenido, señaló que el Tribunal Colegiado sí llevó a cabo un análisis de constitucionalidad, ya que no sólo se limitó a transcribir el artículo 13 de la Norma Fundamental, pues lo interpretó al establecer qué se entiende por fuero de guerra y por qué razón estima que debe entenderse de esa forma, para arribar al análisis del artículo 57 del Código de Justicia Militar y concluir, finalmente, que debe ser el juez militar el que conozca de la causa penal.

Finalmente, indicó que si bien no comparte el criterio en el sentido de que debe emprenderse el estudio de la competencia por vía del cumplimiento a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “*****”, lo respeta profundamente, reiterando que la atracción de los juicios respectivos implica que se efectuará un análisis atendiendo a las particularidades de cada caso, a partir del cual, en el presente asunto, podría estimarse que el Tribunal Colegiado no tendría por qué haber hecho un control de convencionalidad, toda vez que ni siquiera el

Sesión Pública Núm. 94 Lunes 10 de septiembre de 2012

artículo 1º había sufrido aún la modificación más reciente, y que el análisis de decisiones firmes trastocaría la seguridad jurídica y afectaría el sistema jurídico mexicano.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea distinguió entre descalificar o calificar a los señores Ministros y hacer referencia a sus argumentos. Indicó que calificar éstos no constituye una falta de respeto hacia sus autores, y que él no se ha molestado cuando ello se verifica, citando como ejemplos algunos comentarios de diversos señores Ministros.

El señor Ministro Presidente Silva Meza reflexionó sobre la pasión que envuelven los debates, señalando estar convencido de que ello legitima las decisiones.

La señora Ministra Luna Ramos aclaró que no se ha molestado en virtud de la calificación de los argumentos.

Sometida a votación la propuesta del considerando cuarto del proyecto, se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministros Cossío Díaz en contra de las consideraciones, Franco González Salas en contra de las consideraciones, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Silva Meza. Los señores Ministros Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Aguilar Morales y Ortiz Mayagoitia votaron en contra.

Sesión Pública Núm. 94 Lunes 10 de septiembre de 2012

El señor Ministro Presidente Silva Meza convocó a los señores Ministros para la Sesión Pública Ordinaria que se celebrará el martes once de septiembre del presente año, a partir de las once horas, y levantó esta sesión a las trece horas con quince minutos.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza, y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, que da fe.